

REPÚBLICA DE COLOMBIA



RAMA JUDICIAL

TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN

Medellín, diez (10) de agosto de dos mil veintitrés (2023)

La Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, integrada por los Magistrados CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES (ponente), VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO y SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE, cumplido el traslado de que trata el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, procede a dictar la sentencia que corresponde en este proceso ordinario laboral promovido por GABRIEL NELSON RÍOS PÉREZ contra ANTIOQUEÑA DE COMBUSTIBLES S.A.S. (Radicado 05088-31-05-002-2021-00158-01).

ANTECEDENTES

El demandante inició este juicio con el fin de obtener la declaratoria de su calidad de trabajador frente a Antioqueña de Combustibles S.A.S., bajo la concepción de un contrato trabajo y en consecuencia, se condene al reconocimiento y pago de las prestaciones sociales y las vacaciones no pagadas, las horas extras laboradas, los aportes al Sistema de Seguridad Social, la indemnización por despido sin justa causa debidamente indexada, la indemnización por la incapacidad permanente parcial adquirida a partir de un accidente de trabajo sufrido y las costas procesales.

En respaldo a sus aspiraciones narró que fue vinculado por la demandada mediante un contrato de trabajo verbal a término indefinido entre el 15 de mayo de 2010 y el 20 de mayo de 2019, ejecutando la función de guarda de seguridad en un horario de lunes a domingo de 5:00 p.m a 7:00 a.m., devengando el salario mínimo legal mensual vigente. Señaló como su jefe inmediato al señor Carlos Mario Molina, y ocurrida su muerte, tal atribución la acogió Lina María Arroyave, la que le ordenaba vigilar la bomba y a sus isleros, mencionando a Laura Molina como su compañera de trabajo. Que sufrió un accidente de trabajo el 08 de junio de 2015 que le implicó una cirugía con posterior incapacidad de cinco meses, la que le generó una pérdida de capacidad laboral del 13.9%. Agregó que a la finalización de su contrato no le fueron pagadas sus prestaciones sociales ni la indemnización por el despido ocurrido.

ANTIOQUEÑA DE COMBUSTIBLES S.A.S. se pronunció sobre los hechos y pretensiones, negando la existencia de un contrato de trabajo con el demandante y de cualquier otro vínculo comercial o profesional, ya que de su parte no se obtuvo un servicio personal de ninguna índole, aclarando que Carlos Mario Molina era quien fungía como propietario del parqueadero contiguo a las oficinas de la sociedad bajo el desarrollo de una actividad independiente, por lo que su calidad de empleado lo era ante Carlos Mario, lo que conlleva a que no se generara ninguna obligación laboral a su cargo.

Como excepciones de mérito formuló las de inexistencia de relación laboral, civil comercial: falta de legitimación en la causa por pasiva, inexistencia de solidaridad laboral, prescripción de derechos laborales, sociales y prestaciones, inexistencia de despido indirecto, inexistencia de responsabilidad por culpa patronal y buena fe de la Sociedad Antioqueña de Combustibles.

En igual oportunidad, la convocada formuló llamamiento en garantía contra Laura Molina Gómez, el que fue admitido de parte del Juzgado por auto del 28 de abril de 2022 (Archivo 07).

LAURA MOLINA GÓMEZ aceptó todos los hechos del llamado y al mismo tiempo, ilustró sobre la vinculación de su padre Carlos Mario Molina a la empresa demandada, para luego pasar a encargarse del parqueadero de propiedad de la sociedad, donde se vinculó al demandante desde el 15 de mayo de 2010 para cumplir funciones de vigilancia en un horario de 5:00 p.m. a 7:00 a.m. con 1 día de descanso, generándose los pagos de su salario sin expedirse recibos, precisando que luego de ocurrida la muerte del señor Carlos Mario, ese rol lo asumió en su calidad de hija, continuando idénticas condiciones contractuales con Gabriel Nelson, a quien en efecto no le fueron pagados los aportes a la seguridad social, ni le fueron reconocidas sus prestaciones sociales porque ello ocurrió en virtud a la terminación del contrato de arrendamiento, sin recursos para cubrir tales rubros. Como excepción de fondo propuso la de prescripción.

En ese marco procesal, el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Bello- Antioquia, profirió sentencia el 23 de septiembre de 2022, donde ABSOLVIÓ a la demandada y a la llamada en garantía de todas las pretensiones de la demanda, y CONDENÓ en costas al demandante, fijando las agencias en derecho en la suma equivalente a \$100.000.

La Sala en el marco de lo que regula el artículo 69 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, conoce del asunto por el grado de consulta en favor del demandante por resultarle la decisión plenamente desfavorable sin que fuera por alzada atacada la decisión.

En el término pertinente, las partes presentaron sus alegaciones de segunda instancia, con argumentos semejantes a los expuestos en las etapas procesales transcurridas en primer grado.

CONSIDERACIONES

Atendiendo la materia objeto de consulta, el problema jurídico a definir en esta oportunidad por esta Sala de decisión orbita en determinar si entre el demandante y Antioqueña de Combustibles S.A.S. existió o no un contrato de trabajo, en el que el demandante tuvo la calidad de trabajador, y en caso positivo, si procede la condena de los emolumentos pedidos.

Para resolver, ha de señalarse que resultan de especial importancia los mandatos de los artículos 22, 23 y 24 del C.S. del T, en tanto estas disposiciones remiten al concepto y elementos esenciales de un contrato de trabajo, última disposición normativa que establece:

“Presunción. Se presume que toda relación de trabajo personal está regida por un contrato de trabajo”.

Esta presunción, lo ha dicho y reiterado la jurisprudencia laboral en infinidad de providencias, se trata de una ventaja probatoria para quien invoque su condición de trabajador, pero admite prueba en contrario, lo que se traduce en que si se pretende demostrar la existencia de otro vínculo contractual, civil, comercial o administrativo, que de pie a la ausencia del elemento subordinación o dependencia jurídica, o la ausencia de remuneración, la carga de prueba corre por cuenta del empleador, dada la imposición del artículo 167 del CGP, correspondiéndole, en consecuencia, el deber de desvirtuar la subordinación o dependencia.

Ahora bien, no discutiéndose por las partes los servicios prestados por el actor en su oficio de vigilante, era de suyo dar cuenta que así ocurrió para el servicio de Antioqueña de Combustibles S.A.S, y derruir la confesión proveniente de la vinculada como llamada en garantía, quien aseguró haber estado el actor subordinado a su padre Carlos Mario Molina, y luego por virtud de su muerte, bajo su potestad para ejecutar la vigilancia del parqueadero que se aceptó en el trámite era de propiedad de la sociedad que integra la litis y lindaba con la estación de servicio Zeus ubicada en el Municipio de Copacabana - Antioquia.

En ese orden, el promotor de la acción debió acreditar en este escenario los requisitos que regula el artículo 23 del CST frente a Antioqueña de combustibles para que se entienda configurada una relación de índole laboral.

Con ese fin, ninguna probanza documental se arribó por Gabriel Nelson Ríos Pérez, pues se limitó el actor a aportar un historial clínico (Págs. 28-54 Archivo 01), del que no se desprende información que muestre rasgos o detalles de su vinculación laboral para junio de 2015, aun cuando tales registros corresponden a la data en que sufrió un accidente calificado como de origen laboral (Págs. 55-68 Archivo 01).

Pero para ese efecto, fueron recepcionados los testimonios de LEIDY VIVIANA VILLEGAS VILLEGAS y MARTHA HERMINIA ZAPATA RUIZ. La primera fue empleada de la sociedad convocada entre 2015 y 2016 y luego desde 2020, y afirmó haber conocido al actor como vigilante de la estación del servicio de Copacabana, la serviteca y el parqueadero, afirmando que *“todo era lo mismo”*, cuyas funciones vistas que fueron ejercidas por el señor Ríos era el de acomodar carros, hacer labores de vigilancia y hacer acompañamiento en la lavada de la estación de servicio donde ella fungía como islera, señalando haber observado de parte de Lina Arroyave suministrarle órdenes, primero, advirtiéndole que

solo por una vez, y luego, en varias ocasiones, relacionadas con los carros y la reja del parqueadero, presenciado ser mandado a llamar de las oficinas de Antioqueña de Combustibles, suponiendo que sus pagos provenían de la sociedad. Adujo que Carlos Mario era otro compañero que ejecutaba las mismas funciones de Nelson pero en el día, desconociendo negocios de alquiler sobre el parqueadero y alguna orden que proviniera de Carlos Mario para Nelson o *“jardín”* como era conocido. Señaló que Gabriel Nelson no portaba uniforme, pues esto solo ocurría con los empleados de la serviteca y la gasolinera.

La segunda deponente, vecina de las instalaciones de Antioqueña de Combustibles S.A.S, señaló haber visto al actor dando ronda a la bomba de gasolina y al parqueadero que estaban unidos y quedaban en frente de su casa, concluyendo que quien contrató al actor fue Juan Carlos Jiménez por ser el propietario de ese lote, de donde igualmente desprende la fijación de horarios del demandante y el pago de su salario, además de estar bajo su sujeción Carlos Mario y Laura Molina, quienes permanecían en el parqueadero para ver qué carro entraba y salía, aduciendo que logró ver a Gabriel Nelson dando vueltas en la bomba abriendo la puerta a buses y carros que guardaban allí.

Por solicitud de la pasiva fueron recibidas las declaraciones de LINA MARÍA ARROYAVE PALACIO y YULI JANETH ROMERO, empleadas de la demandada, mismas que coincidieron en señalar que Nelson trabajaba en el parqueadero que queda detrás de la estación de servicio Zeus de Copacabana, cuyo establecimiento es de propiedad de Antioqueña de Combustibles S.A.S, pero estaba a cargo del señor Mario Molina, quien contaba con un negocio independiente en ese lugar para el parqueo de vehículos de los clientes de la bomba y de externos y para la utilización del espacio daba una retribución al señor Juan Carlos Jiménez dueño del lote y la empresa, siendo formalizado ese contrato en 2017 con Laura Molina, convenio que daba lugar que se cruzaran

cuentas entre la bomba, estando desentendidas del funcionamiento del lugar, pero con la claridad que Nelson se entendía era con Mario, quien primero perteneció al grupo de trabajo de la sociedad. Ambas enfatizaron que de parte de la señora Arroyave no provenían órdenes dirigidas a Nelson porque no hacía parte del grupo de trabajo porque el parqueadero era independiente, sin negar que Gabriel Nelson se hacía presente en la bomba para tomar tinto y conversar pero que nunca fue advertida su presencia en el lugar por estar contratado como vigilante, no se encontraba dentro del organigrama, no había manual de funciones para esta labor, ni se programaba horario para este empleado pese a la publicación que se realizaba cada mes por cada empleador vinculado.

Como apoyo a estos dichos, que se consideran por esta Sala coherentes y espontáneos, se cuenta con una documental que refleja la celebración de un contrato de arrendamiento entre Laura Molina Gómez y Antioqueña de Combustibles S.A.S para el 28 de febrero de 2017 (Págs. 21-24 Archivo 06) ,además de contar con la prueba de su terminación (Págs. 26-27 Archivo 06), hallando soportado el hecho de estar el parqueadero a cargo de persona distinta a la demandada, primero por intermedio de un convenio informal con Carlos Mario Molina, y luego, materializado en una contratación de tipo comercial con Laura Molina, de donde los arrendatarios promovían el desarrollo de su negocio bajo condiciones de autonomía e independencia, el que por demás se constituyó en el origen de sus ingresos familiares, sin que en su marcha se demostrara alguna intromisión de la compañía que influyera en el aspecto organizacional de esta fuente de negocio, y mucho menos en la vinculación de sus colaboradores, o en cualquier aspecto que tuviera que ver con su funcionamiento y factor económico relacionado con los ingresos, ganancias o pérdidas del establecimiento de comercio; sin que valga decir, ese acto comercial endilgue alguna responsabilidad de tipo laboral al propietario del lugar pues el propósito del arrendamiento es

precisamente conceder el uso y goce del inmueble, donde la explotación económica no atañe al arrendador.

Adicionalmente, toda esta información guarda absoluta coherencia con el dicho de Laura Molina Gómez desde su escrito de respuesta a la demanda y al llamamiento en garantía, quien aceptó su calidad de empleadora frente al actor para desempeñar funciones de vigilancia en el parqueadero que era propiedad de la sociedad demandada, pero que se encontraba arrendado para dar ejecución a la actividad productiva de su padre y luego, esa operación pasó a estar a su cargo por la muerte de aquel, observando del conjunto probatorio atendiendo el principio de la sana crítica, que la convicción se inclina por las probanzas que arribó la convocada, por tratarse de medios que cuentan con mayor solidez, y en cambio, los vestigios del promotor del juicio se quedan cortos para dar por sentada una prestación del servicio de vigilancia en beneficio de Antioqueña de Combustibles S.A.S, que permita de paso dar aplicación a la presunción que pregonan el artículo 24 del CPTSS, encontrando que si bien pueden surgir confusiones respecto del lugar de la prestación del servicio por tratarse de establecimientos que se encuentran ubicados en el mismo lote, lo que implica necesariamente que el trabajador se viera movilizado tanto en el parqueadero como en la estación de servicios, lo cierto es que lo que ha quedado demostrado en este escenario judicial, es que sus funciones estaban atadas a la del parqueadero en horario nocturno, y que era Carlos Mario Molina y luego Laura Monsalve quienes dirigían su actividad en cuanto a imposición de horarios, y la forma, y modo de desarrollar su labor, además de ser los responsables de efectuar el pago salarial.

Y es que la única evidencia que pudiera dar cuenta de que el nexo se presentó fue con la empresa demandada, es el dicho de Leidy Viviana Villegas, pero no se hace posible obviar que el mismo se aleja de la intervención del demandante al absolver su interrogatorio de parte,

porque es que la sujeción laboral que se alega desde el escrito inicial tiene un enfoque especial en la intervención de Lina Arroyave en el oficio del actor, pero es que el señor Ríos aun cuando señaló que de ella provenían las instrucciones, aclaró en este trámite que así ocurrió en dos oportunidades sin atribuir en otra persona la calidad de jefe, pues en una relación que perduró por casi una década señaló no haber tenido la necesidad de acudir a un superior, expresión que además de resultar irrazonable acorde a situaciones de lógica y de experiencia, discrepa absolutamente de la afirmación de su testigo y la de las demás deponentes, a más de indicar que con el señor Juan Carlos Jiménez de quien pregonó su calidad de empleador, habló por mucho una sola vez por vía telefónica, con lo que no se logra mostrar la participación de la empresa o de alguno de sus representantes, en las condiciones contractuales de este colaborador, desprendiéndose la ausencia de una probanza efectiva que dé cuenta que su labor estaba sujeta a la esfera organicista, rectora y disciplinaria de la sociedad, y se derruya la confesión proveniente de Laura Molina y los argumentos de defensa de Antioqueña de Combustibles S.A.S.

De modo que, los medios demostrativos presentados no permiten dar razón a los argumentos de la activa, encontrando que si bien pudo corroborarse que el demandante en los extremos indicados se desempeñó como vigilante del parqueadero ubicado en la Calle 50 N° 59-00, que linda con la Estación de Servicio Zeus, no fue en su calidad de subordinado ante Antioqueña de Combustibles S.A.S., la que por demás certificó por medio del área de gestión humana no contar con registros de este trabajador (pág. 31 Archivo 06), con lo que se configura una falta de legitimación por pasiva para dar satisfacción a los emolumentos laborales insolutos que se persiguen.


Tal conclusión conlleva a confirmar la sentencia absolutoria venida en consulta. Sin costas.

DECISIÓN:

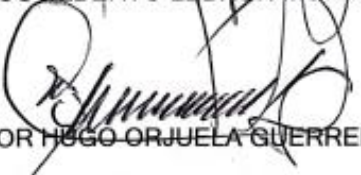
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Quinta de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, **CONFIRMA** la sentencia consultada de fecha y procedencia conocidas. Sin costas.

Notifíquese por EDICTO.

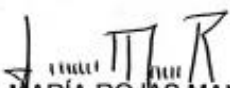
Los Magistrados,



CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES



VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO



SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
SALA LABORAL**



**SECRETARÍA
EDICTO**

El Secretario de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín:

HACE SABER:

Que se ha proferido sentencia en el proceso que a continuación se relaciona:

Radicación: 05088310500220210015801
Proceso: ORDINARIO LABORAL
Demandante: GABRIEL NELSON RIOS PEREZ
Demandado: ANTIOQUEÑA DE COMBUSTIBLES S.A.S.
M. P. CARLOS ALBERTO LEBRUN MORALES
Fecha de fallo: 10/08/2023
Decisión: CONFIRMA

El presente edicto se fija por el término de un (01) día hábil, con fundamento en lo previsto en el artículo 41 del CPTSS, en concordancia con el artículo 40 *ibídem*. La notificación se entenderá surtida al vencimiento del término de fijación del edicto.

Se fija hoy 11/08/2023 desde las 08:00 am. y se desfija a las 05:00 pm.

RUBÉN DARÍO LÓPEZ BURGOS
Secretario